

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

El pasado lunes 26 de noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, hacía unas declaraciones donde minimizaba las masacres coloniales cometidas contra los pueblos originarios de Norteamérica. En concreto, tras negar prácticamente una historia a Estados Unidos más allá de su moderna fundación en el siglo XVIII, afirmaba que "lo único que habían hecho es matar a cuatro indios, aparte de eso fue muy fácil".

Es propio de la persistencia de la mentalidad colonial y su indudable trasfondo racista el pensar que la historia de un continente comienza con la colonización europea. También negar el protagonismo activo de migrantes, mujeres, trabajadores y campesinos a la hora de contar la historia. Cuando además se minimizan o niegan las grandes masacres coloniales, se entra ya en un estadio aún más preocupante, sobre todo cuando esto lo protagoniza el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, es decir, el responsable de nuestra diplomacia.

El proceso de invasión y colonización de Norteamérica, llevado a cabo desde el mismo siglo XVI, finalizó a fines del siglo XIX con la expulsión definitiva y la reclusión en reservas de los últimos supervivientes de entre los nativos americanos. A día de hoy, el racismo y las diferentes opresiones que sufren en Estados Unidos sus descendientes se interpretan directamente relacionadas con todo ello.

Arrastrados a la pobreza una vez rotas sus estructuras sociales, víctimas además de una política de asimilación cultural agresiva, este proceso de conquista no estuvo exento de una gran violencia que para un número significativo de académicos podría constituir un genocidio. Aunque los datos nunca resultan definitivos, hay un acuerdo respecto al alto número de vidas que se llevó por delante la colonización norteamericana. Algunas estimaciones cifran que, para el periodo comprendido entre 1775 y 1890, perdieron la vida fruto de la empresa colonizadora alrededor de 350.000 personas pertenecientes a los distintos pueblos amerindios o nativos de Norteamérica, incluidas mujeres y niños. Esta estimación parte de la constancia por parte del propio Gobierno norteamericano de que alrededor de 45.000 personas perdieron la vida en medio de los combates contra los invasores de origen europeo en el periodo, a las que habría que sumar 8.500 a las que mataron en enfrentamientos con personal no militar, algo que da cuenta de la magnitud de las personas que fueron directamente aniquilados por soldados y colonos blancos. Y a estas habría que añadir todas aquellas que fallecieron debido a los traslados, las prisiones, la malnutrición, la esclavitud y los trabajos forzados, el expolio natural o las epidemias que diezmaron desde el mismo año de 1513 en Florida o en 1617 en la bahía de Massachussets a las víctimas de este trágico encuentro colonial.

En palabras de Gregorio Doval, en su repaso de las vicisitudes de esta conquista:

"Antes de la llegada del hombre blanco, un heterogéneo conglomerado de más de 500 pueblos distintos habitaba Norteamérica (...) Esa poliédrica civilización se extendía de océano a océano, rica y, a la vez, diversa en formas y estilos de vida, en culturas, creencias y tradiciones (...) En 1615, cuando los colonos franceses iniciaron el desalojo de las tierras de los onondegas, comenzó para las decenas de tribus del extenso territorio norteamericano la dramática y terrible alternativa de ser exterminados. En poco más de doscientos cincuenta años, varios millones de indios de Norteamérica fueron expulsados de sus tierras, internados en reservas, expoliados de sus bienes, despojados a la fuerza de su

identidad y, a menudo, masacrados. Y en solo cien años, los que fueron desde la Declaración de independencia estadounidense (4 de julio de 1776) hasta la batalla de Little Big Horn (25 de junio de 1876), en que grupos de guerreros siux, cheyenes y arapajoes infligieron la mayor humillación de su historia al ejército estadounidense, se produjo el declinar y la práctica desaparición de docenas de culturas indígenas, de las que solo quedaron los ecos”.

En la misma conferencia en la Universidad Complutense Josep Borrell destacó también, a raíz del reciente caso del cómico Dani Mateo – investigado por un juzgado madrileño de delitos de odio y ultrajes a la bandera por sonarse con la enseña rojigualda en un *sketch* televisivo-, que “pobre de ti si [en Estados Unidos] la usas [la bandera] para quitarte los mocos”. Resulta grave que el responsable de la diplomacia española desconozca que desde hace casi treinta años en Estados Unidos no es delito la quema de la bandera, una acción amparada por la libertad de expresión a pesar de que el actual presidente, Donald Trump, se haya mostrado en repetidas ocasiones en contra de esta doctrina establecida en 1989 por el Tribunal Supremo de su país.

Por último, recordemos que hablamos del ministro que justamente esta semana ha sido sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con 30.000 euros por vender un paquete de acciones cuando manejaba información privilegiada como consejero de Abengoa. Según diversas informaciones periodísticas a partir de su declaración de bienes, el propio Borrell mantendría unos 600.000 euros en acciones y participaciones en bolsa, lo que podría generar un conflicto de intereses.

Es por ello que planteamos las siguientes preguntas al Gobierno:

¿Qué opinión le merece al Gobierno que todo un ministro de Asuntos Exteriores despache un doloroso periodo histórico, que supuso el exterminio de alrededor de 350.000 nativos americanos, con la afirmación de que se “mataron cuatro indios”?

¿Comparte el Gobierno la visión histórica colonial de su ministro de Asuntos Exteriores por la que niega su historia a los más de 500 pueblos originarios de Norteamérica, previos a la conquista europea y que habitaban desde hacía siglos esas tierras?

¿Sustenta el Gobierno la posición punitiva contra las libertades civiles de su ministro de Exteriores, toda vez que además falsea el estado de dichas libertades en un país tan determinante en la esfera internacional como es Estados Unidos?

¿Garantiza el Gobierno que Josep Borrell, con unas acciones y participaciones en bolsa que ascenderían a 600.000 euros según algunos medios, no está cayendo en un conflicto de intereses desde su posición como ministro de Asuntos Exteriores?

Y finalmente, ¿piensa este Gobierno mantener en el cargo de ministro al señor Borrell después no solo de estas declaraciones inadmisibles sino también de la reciente sanción recibida por la CNMV?

Palacio del Congreso de los Diputados.
Madrid, 28 de noviembre de 2018.


Edo.: Alberto Garzón

(Izquierda Unida)

GP Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea